

C. A. Santiago.

Santiago, siete de diciembre de dos mil veintitrés.

En los autos Rol C- 29183-2019, seguidos ante el 21° Juzgado Civil de Santiago, por juicio ordinario, caratulado “FAVREAU/ CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO”, ambas partes en conflicto dedujeron apelación, la actora lo hizo en relación al monto fijado como daño moral; en tanto que, la demandada, por haberse desestimado sus defensas de reparación integral, prescripción, monto de la indemnización e improcedencia de interés en la forma decretada, y ordenado el pago de costas. En ambos casos, recurren contra la sentencia definitiva de fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, que en lo resolutivo procedió a acoger, parcialmente, la demanda interpuesta y condenó al Fisco de Chile: III.- a pagar a cada uno de los demandantes, a título de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de cincuenta millones de pesos (\$55.000.000.-), más los reajustes e intereses consignados en el fundamento **vigésimo segundo del fallo, con costas.**

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con la siguiente modificación: *En su motivo vigésimo primero, se elimina el guarismo 55.000.000 el que se reemplaza por los siguientes: Gregorio Navarro Murillo, la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos); Juan José Martínez Rojas, la suma de \$70.000.000 (setenta millones de pesos); Hernán Del Carmen Quila Núñez, la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos); Ángel Emilio Quila Núñez, la suma de \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos); Víctor Ramón González Soto, la suma de \$30.000.000 (treinta millones de pesos); Luis Humberto Bustos Miranda, la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos); Silas Araya Pinto, la suma de \$30.000.000 (treinta millones de pesos); Oscar Segundo Catalán Aguilera, la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos); y Luis Eugenio Favreanu Aguilera la suma de \$60.000.000 (sesenta millones de pesos).*

Y se tiene, en su lugar y, además, presente:

1º.- Que, el Fisco de Chile se alza en contra de la sentencia definitiva de primera instancia que desestimó las excepciones invocadas



por su parte de haber sido ya reparados los perjuicios; haber operado en la especie la prescripción; por el monto asignado en la sentencia por concepto de daño moral y, por último, respecto de la forma de calcular los intereses.

2º.- Que esta Corte comparte los argumentos de primera instancia para desestimar las excepciones opuestas. En efecto, no puede estimarse suficiente la reparación simbólica que ha hecho el Estado de Chile o los beneficios que otorga el Programa PRAIS, pues se trata de reparaciones generales que no logran reparar el daño particular y propio que sufren las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que solo puede determinarse en un juicio en el que puedan ponderarse las situaciones particulares de cada caso, de manera que procedía desechar la excepción de reparación opuesta.

3º.- Que en cuanto a la excepción de prescripción, es un hecho pacífico que el derecho internacional consagra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los de lesa humanidad prohibiéndose por la Convención de Ginebra que las partes contratantes se exoneren a sí mismas de las responsabilidades incurridas a causa de tales hechos. Tampoco resulta cuestionado que los demandantes GREGORIO NAVARRO MURILLO, JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ROJAS, HERNÁN DEL CARMEN QUILA NÚÑEZ, ANGEL EMILIO QUILA NÚÑEZ, VÍCTOR RAMÓN GONZÁLEZ SOTO, LUIS HUMBERTO BUSTOS MIRANDA, SILAS ARAYA PINTO, OSCAR SEGUNDO CATALÁN AGUILERA, y LUIS EUGENIO FAVREAU AGUILERA *fueron víctimas de atentados a los derechos humanos. Así tal como ha sostenido la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en diversos fallos “no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental...”*. (Roles 20.288-2014; 22.856-2016 entre otras).

La legislación civil nacional que consagra la institución de la prescripción está referida a ilícitos comunes y jamás pensada para casos



tan graves como lo son las violaciones a los derechos humanos, cuyo establecimiento se logra después de cambios político-gubernamentales y que suelen durar muchísimas décadas como la experiencia nacional demuestra.

De esta manera, los preceptos legales que invoca el Fisco de Chile como fundamento de su solicitud no resultan atinentes al encontrarse en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que amparan el derecho de la víctima a recibir la reparación correspondiente, motivo por el cual acierta el tribunal de primera instancia al desestimar la prescripción extintiva invocada como alegación principal y la prescripción extintiva ordinaria deducida en subsidio.

4º.- Que, al encontrarse acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que la detención y tortura de las víctimas, que no habrían tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, por lo que sólo quedó por dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en esos hechos.

5º.- Que, esos antecedentes acreditan el secuestro como los apremios físicos y psicológicos infligidos a cada uno de los demandantes, y en lo que toca a la entidad de estos últimos, se acompañó: Certificado de Salud de don Gregorio Navarro Murillo emitido por el PRAIS de Coquimbo, de fecha Noviembre de 2021; certificado de Salud de don Juan José Martínez Rojas emitido por el PRAIS de Coquimbo; certificado de Salud de don Ángel Emilio Quila Núñez emitido por el PRAIS de Coquimbo, de fecha Noviembre de 2021; certificado de Salud de don Víctor Ramón González Soto emitido por el PRAIS de Coquimbo, de fecha Septiembre de 2020; certificado de Salud de don Luis Humberto Bustos Miranda emitido por el PRAIS de Coquimbo; certificado Médico de don Luis Humberto Bustos Miranda emitido por el Dr. Víctor Valenzuela Valenzuela, de fecha 23 de Octubre de 2019; certificado de Salud de don Silas Araya Pinto emitido por el PRAIS de Coquimbo; certificado de Salud de don Oscar Segundo Catalán Aguilera emitido por el PRAIS de Coquimbo, de fecha Febrero de 2021; certificado de Salud de don Luis Eugenio Favreau Aguilera emitido por el PRAIS de Coquimbo, de fecha Agosto de 2020; Informe de la Comisión Nacional



sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1; Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 2, en la que don Gregorio Navarro Murillo figura bajo el número 944 y don Víctor Ramón González Soto figura bajo el número 3725; Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1, en la que don Juan José Martínez Rojas figura bajo el número 14.320; don Hernán del Carmen Quila Núñez figura bajo el número 19.667; Ángel Emilio Quila Núñez figura bajo el número 19.666; don Luis Humberto Bustos Miranda figura bajo el número 3690; don Silas Araya Pinto figura bajo el número 1789; Oscar Segundo Catalán Aguilera figura bajo el número 5300 y Luis Eugenio Favreau Aguilera figura bajo el número 8261; Copia autorizada de antecedentes de carpeta de don Gregorio Navarro Murillo, don Juan José Martínez Rojas, don Víctor Ramón González Soto, Hernán del Carmen Quila Núñez, don Ángel Emilio Quila Núñez, don Luis Humberto Bustos Miranda, don Silas Araya Pinto, don Oscar Segundo Catalán Aguilera y don Luis Eugenio Favreau Aguilera del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; Certificado Psicológico y Social de los demandantes evacuado por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, de fecha 05 de Noviembre de 2020; certificado de nacimiento de don Luis Humberto Bustos Miranda, emitido con esta fecha por el Servicio de Registro Civil e Identificación; certificado de nacimiento de don Luis Eugenio Favreau Aguilera, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; certificado de Salud de don Hernán del Carmen Quila Núñez emitido por el PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Hospital de Melipilla, de fecha Junio de 2021. Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental”, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia; Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad; Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la



Solidaridad. Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad. Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.- Certificado de Salud de don Gregorio Navarro Murillo emitido por el PRAIS de Coquimbo, de fecha Noviembre de 2021.

6º: Que, en cuanto al monto dinerario que se reguló por indemnización por daño moral, para lo que se adjuntaron las evidencias documentales a que alude en los motivos cuarto de la sentencia enalzada, son los que permitieron acreditar que:

a) don GREGORIO NAVARRO MURILLO, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 5944, nacido el 05 de Octubre de 1936, de 82 años de edad a la época de presentación de la demanda, Militante del Partido Socialista a la época de ocurrencia de los hechos, se desempeñaba como taxista y dirigente sindical. Fue detenido en su domicilio el día 11 de Septiembre de 1973 por personal de Carabineros de Chile, quienes portaban metralletas y revólveres y trasladado en una camioneta particular a la 4° Comisaría de Melipilla, ubicada en calle Ortúzar Nro. 674, entre Valdés y Libertad, lugar donde quedó recluso. Personal de Carabineros, durante el período de su reclusión, lo torturó con golpes de pies y puños en el estómago, culatazos, le ponían un saco mojado en el abdomen, le pegaban con ambas manos en los oídos, utilizando el método de tortura conocido como el teléfono, amenazas de muerte, lo obligaban a permanecer de pie durante todo el día y simulacros de fusilamiento, además de tener que presenciar las torturas a sus compañeros. Además, le impedían dormir con disparos y golpes en la celda que ocupaba. En sus torturas participó también el médico BERNARDO PURTO. Lo mantuvieron incomunicado y en ocasiones vendado durante todo el período que duró su reclusión, debiendo dormir, junto a otros reclusos, en una



celda sin camarotes, con piso de concreto, la que tenía una taza sanitaria tapada y que se anegaba, inundando de excremento todo el lugar. Quedó en libertad con fecha 30 de Septiembre de 1973. Producto de las torturas a que fue sometido sufre de insomnio, pesadillas, dolor de oídos y riñones y temor constante a los uniformados, a ser detenido y nuevamente torturado. Quedó con secuelas físicas y psicológicas.

b) JUAN JOSE MARTINEZ ROJAS, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 14.320, nacido el 30 de Octubre de 1948, de actuales 74 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era dirigente sindical, funcionario de Dirinco y director de la juventud socialista, seccional Melipilla. Fue detenido en su domicilio ubicado en ese entonces en calle Silva Chávez Nro. 1414, Melipilla, a las 16:00 horas del día 16 de Septiembre de 1973 por personal de Carabineros de Melipilla. Su detención fue practicada por un piquete de carabineros de aproximadamente quince efectivos, en el marco de un allanamiento a su domicilio, donde los referidos uniformados, que procedieron a romper colchones, roperos y cómodas, buscaban armamento que, según aquellos, don Juan tenía en su poder. Trasladado a la 4° Comisaría de Carabineros de Melipilla queda a disposición del médico BERNARDO PURTO. Se le imputaban los cargos de experto en explosivos, activista del Partido Socialista, lugarteniente del diputado Matías Núñez Malhue y agresión a un policía en actos de servicio. Al momento de su detención, su cónyuge se encontraba embarazada y fue duramente golpeada por el carabinero de apellido CARRASCO. En la comisaría, don Juan recibe torturas consistentes en golpes de pies y manos y culatazos en distintas partes de su cuerpo. Además, le pusieron corriente en los testículos, piernas, brazos y lengua, producto de lo cual sufrió la pérdida de su dentadura. El castigo recibido fue insoportable, siendo tirado como un bulto en las caballerizas de la comisaría y dejado ahí hasta el día siguiente. El día 17 de Septiembre de 1973 es trasladado al Regimiento de Tejas Verdes y recibido por militares al mando de MANUEL CONTRERAS SEPÚLVEDA. Nuevamente es torturado, esta vez por los militares de Tejas Verdes, siendo trasladado el día 18 de Septiembre de 1973 a la Cárcel de Barranca, lugar en el que



permanece por un término de 27 días hasta el 13 de Octubre de 1973, fecha en la que es ingresado a la Cárcel de Melipilla, la que se encontraba bajo el mando del Fiscal de Melipilla capitán de carabineros SERGIO BRIEVAS. Su trato en la cárcel fue peor aún, siendo torturado en reiteradas ocasiones con electricidad en genitales y boca, puntapiés en la boca y culatazos. Queda en libertad por falta de méritos el día 30 de Marzo de 1974, permaneciendo recluido 6 meses y 13 días. El día 01 de Abril de 1974 es detenido nuevamente a requerimiento del Tribunal Militar e ingresado en la 4ª comisaría de carabineros de Melipilla. Según la denuncia, efectuada por un comerciante de nombre WALDO SALFATE HERRERA, don Juan habría estado colocando artefactos explosivos en el alumbrado público de Melipilla de un sector denominado El Bajo. En dicha comisaría, donde permanece por 21 días detenido, es nuevamente torturado, esta vez por el doctor BERNARDO PURTO. Queda en libertad por falta de méritos en la última fecha indicada. Además de lo anterior, todos los días 11 de Septiembre entre los años 1974 y 1979 era detenido por Carabineros en forma “preventiva”. Producto de las torturas sufridas, padece de secuelas físicas y psicológicas consistentes en pérdida de la dentadura maxilar superior, fractura del brazo izquierdo, lumbago crónico desde la detención, depresión mayor, trastorno de ansiedad, insomnio, dolor crónico en la zona renal y psoriasis. Sus detenciones trajeron aparejado, además, la imposibilidad de don Juan de desempeñarse laboralmente, no tenía opciones de trabajo y sólo pudo laborar en empleos esporádicos como el PEM y el POHJ.-

c) HERNAN QUILA NUÑEZ Y ANGEL EMILIO QUILA NUÑEZ, el primero con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 19.667, nacido con fecha 03 de Marzo de 1945, de actuales 77 años de edad –a la época de presentación del libelo-. El segundo con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 19.666, nacido el 28 de Noviembre de 1946, de actuales 76 años de edad–a la época de presentación de la demanda-. Fueron detenidos en su domicilio el día 14 de Septiembre de 1973 por personal de carabineros, específicamente el Sargento SILVIO CONCHA, el Cabo EMILIO MARÍN y carabinero HUAICALEO, quienes los secuestran y los sacan del domicilio vendados y esposados, a golpes e insultos y los



conducen a un lugar desconocido en una camioneta. Son maltratados e interrogados. Alrededor de las 17:00 horas del mismo día, los ingresan a la comisaría de Melipilla, donde permanecieron detenidos hasta el día 21 de Septiembre de 1973. En dicho lugar, fueron torturados con la aplicación de corriente eléctrica en los testículos, lengua y oídos, golpes en la cabeza que los aturdieron, golpes en el estómago y amenazados de muerte. También sufrieron simulacros de fusilamiento. Agregan que posteriormente, fueron secuestrados por agentes uniformados entre los días 25 y 29 de Septiembre de 1973, 06 a 09 de Octubre de 1973 y 28 a 30 de Octubre de 1973. En cada una de estas ocasiones el modus operandi se repetía, eran trasladados vendado a un lugar desconocido y torturados, aplicándoseles los mismos tormentos ya detallados. Lo anterior dura hasta que se trasladan, ambos, a trabajar a la ciudad de Calama.- Además de secuelas psicológicas, el primero queda con secuelas físicas que se materializan en dolores e hinchazón del cuerpo, especialmente en el estómago, vómitos de sangre. Manifiesta dolor permanente en la zona renal hasta la fecha. El segundo indica dolor permanente, hasta la fecha, en los oídos por los golpes recibidos. Las secuelas psicológicas, en ambos casos, se tradujeron en temor constante, nervosismo, insomnio y sentimientos de persecución, lo que perdura hasta la fecha.

d) VÍCTOR RAMÓN GONZÁLEZ SOTO, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 3725, nacido con fecha 12 de Abril de 1947, de actuales 76 años de edad—a la época de presentación de la demanda. A la fecha de ocurrencia de los hechos era simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y profesor del Liceo de Melipilla. Fue detenido, acusado de repartir armas, el día 21 de Septiembre de 1973 en la casa de sus suegros por personal de Carabineros, quienes llegan al lugar en una camioneta particular y lo trasladan a la Comisaría de Melipilla, lugar donde permanece un día para luego ser trasladado al Regimiento y Centro de Torturas denominado Tejas Verdes, lugar donde fue ingresado en una pieza y salvajemente torturado con golpes en los oídos con ambas manos abiertas (método de tortura conocido como el teléfono), golpes en el estómago. Luego es trasladado a otra pieza, donde fue amarrado a una silla, le pusieron un trapo en la boca y le torturaron con la



aplicación de corriente eléctrica en testículos y pene. Durante toda su tortura se encontraba con los ojos vendados.- Es trasladado a la Cárcel de Melipilla el día 28 de Septiembre de 1973, recuperando la libertad al día siguiente. Producto de la experiencia vivida queda con graves secuelas sicológicas, angustia permanente y temor a ser aprehendido nuevamente, además de sufrir los efectos del aislamiento de sus compañeros de trabajo

e) LUIS HUMBERTO BUSTOS MIRANDA, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 3690, nacido con fecha 28 de Octubre de 1953, de actuales 69 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos, era menor de edad, trabajaba como fotógrafo corresponsal del Diario El Siglo en la ciudad de Melipilla y militante de las Juventudes Comunistas. Fue detenido producto de una denuncia de una vecina en su domicilio, acusado de formar parte del Plan “Z”, el día 11 de Septiembre de 1973 por personal de Carabineros, allanaron su casa buscando armas. Ingresado en la comisaría de Melipilla, permaneció en un calabozo situado a la entrada de la comisaría. Fue interrogado sobre el diputado Matías Núñez y por armas y salvajemente torturado con golpes de pies, puños y culatazos en todo su cuerpo. En esas condiciones de permanente tortura, permanece por dos días, siendo liberado el día 13 de Septiembre de 1973. Fue detenido en una segunda oportunidad el día 11 de Septiembre de 1974 por personal de carabineros en la plaza de Melipilla, mientras se encontraba tomando fotografías. Fue ingresado al retén El Paico, donde fue interrogado por armas y por el local de reuniones del Partido Comunista, recibiendo golpes de pies y puños, en las costillas principalmente, patadas en las canillas y tobillos, amenazas de todo tipo y principalmente contra su cónyuge e hija. Queda en libertad el día 12 de Septiembre de 1974. Detenido en una tercera oportunidad el día 28 de Agosto de 1986 cuando se dirigía desde Melipilla a Santiago a desarrollar unas fotos. Es bajado de un bus de la locomoción colectiva en un control policial, donde fue agredido por personal de carabineros quienes le preguntaban por una caja con armas y una caja con panfletos. Que en libertad el mismo día. Agrega que durante todos los años que duró la dictadura fue amedrentado, detenido y perseguido en reiteradas ocasiones. Producto de las



experiencias vividas sufrió la fractura del tabique nasal, dos pre infartos, sufre de síndrome vertiginoso y quedó con graves secuelas psicológicas que se traducen en trastorno del sueño, miedo al encierro, a la soledad y tensión nerviosa constante.-

f) **SILAS ARAYA PINTO**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 1789, nacido con fecha 10 de Agosto de 1937, de actuales 86 años de edad.- A la fecha de ocurrencia de los hechos era militante del Partido Comunista y secretario del sindicato de la construcción de Melipilla. Fue detenido, en su lugar de trabajo, el día 11 de Septiembre de 1973 por personal de Carabineros, quienes lo trasladan a la Comisaría de Melipilla, lugar donde fue interrogado y torturado con golpes en los oídos, culatazos, y golpes de puños y pies en otras partes del cuerpo. Le preguntaban por armas y la ubicación del diputado Matías Núñez. Lo anterior duró nueve días, hasta que queda en libertad con fecha 20 de Septiembre de 1973. Producto de las torturas, queda con secuelas físicas consistentes en hematomas en la espalda y trauma acústico y psicológicas, consistentes en miedo y angustia, además de dificultades en lo relativo a la reinserción laboral, por el aislamiento de que fue objeto una vez que recuperó su libertad.

g) **OSCAR SEGUNDO CATALÁN AGUILERA**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 5300, nacido el 02 de Noviembre de 1944, de actuales 74 años de edad –a la época de presentación de la demanda. Fue detenido en su domicilio el día 12 de Septiembre de 1973 por un piquete de Carabineros.- Lo obligan a subir a una camioneta tendido boca abajo y lo trasladan al Retén de Pomaire. El mismo día es llevado a la Comisaría de Melipilla, donde tenían preparadas las celdas con “excremento”. Lo sacaron para interrogarlo en tres ocasiones y le preguntaban por la existencia de armas. En cada interrogatorio era sujetado por dos carabineros, mientras un tercero lo golpeaba con la culata de un fusil en el estómago y en la espalda. Estuvo en dicho lugar cuatro días, siendo torturado cada vez que era interrogado y luego llevado al Centro de Torturas denominado Tejas Verdes. En dicho lugar permaneció en una gran barraca junto a otros detenidos, los tendían en el suelo y personal militar pasaban corriendo sobre ellos. En Tejas Verdes permanece detenido hasta el día 27 de Septiembre de 1973, luego fue



llevado a la Cárcel de San Antonio el día 27 de Septiembre de 1973 y luego a la Cárcel de Melipilla, el día 28 del mismo mes, donde queda en libertad al día siguiente, quedando con graves secuelas psicológicas producto de las torturas sufridas.

h) LUIS EUGENIO FAVREAU AGUILERA, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 8261, nacido el 15 de Mayo de 1954, de actuales 69 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos, era menor de edad, era independiente de izquierda. Fue detenido en la Comisaría de Melipilla el día 12 de Septiembre de 1973, lugar donde se presentó voluntariamente, tras ser llamado en el primer comunicado de prensa. En la Comisaría de Melipilla fue formado en fila junto a otros detenidos mientras personal de carabineros disparaba por entremedio de sus piernas. En dicho lugar, sufre torturas consistentes en simulacros de fusilamiento y golpes de pies y puños en distintas partes del cuerpo. Se mantiene detenido en la comisaría de Melipilla hasta el día 16 de Septiembre de 1973 y luego es trasladado al Centro de Torturas denominado Tejas Verdes, lugar donde permanece hasta el día 20 de Septiembre de 1973, sometido a un régimen de trabajos forzados. Luego, con fecha 20 de Septiembre de 1973 es ingresado a la Cárcel de San Antonio, donde vuelve a sufrir brutales torturas y es interrogado por la existencia de armas. Finalmente, con fecha 28 de Septiembre de 1973 es trasladado e ingresado a la Cárcel de Melipilla, lugar donde permanece interno hasta el 09 de Octubre de 1973, quedando en libertad en esta última fecha. Durante los cuatro años posteriores, para los 11 de Septiembre, era detenido por carabineros y encerrado en un calabozo por algunos días. Producto de las torturas sufridas padeció de graves problemas psicológicos, tenía problemas para relacionarse socialmente, sufriendo de alcoholismo durante siete años, además de no poder trabajar por la persecución política que sufrió luego de salir en libertad

7.- Que las sumas que se ordenan pagar lo serán debidamente reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de ejecutoria de esta sentencia y su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones no reajustables a contar de la fecha de la mora.



8.- Que por considerar que la demandada litigó con motivo plausible, se la exime del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se **CONFIRMA** la sentencia apelada de cinco de diciembre de dos mil veintidós, dictada en la causa Rol C- 29183-2019, seguidos ante el 21º Juzgado Civil de Santiago, por juicio ordinario, caratulado “FAVREAU con CONSEJO DEFENSA DEL ESTADO”, **con las siguientes declaraciones:**

I.- Que el monto de la indemnización que por daño moral deberá pagar el fisco de Chile a cada uno de los actores, es el siguiente: *Gregorio Navarro Murillo, la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos); Juan José Martínez Rojas, la suma de \$70.000.000 (setenta millones de pesos); Hernán Del Carmen Quila Núñez, la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos); Ángel Emilio Quila Núñez, la suma de \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos); Víctor Ramón González Soto, la suma de \$30.000.000 (treinta millones de pesos); Luis Humberto Bustos Miranda, la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos); Silas Araya Pinto, la suma de \$30.000.000 (treinta millones de pesos); Oscar Segundo Catalán Aguilera, la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos); y Luis Eugenio Favreanu Aguilera la suma de \$60.000.000 (sesenta millones de pesos).*

II.- Que la suma ordenada pagar devengará reajustes e intereses en la forma dicha en el fundamento séptimo de este fallo.

III.- Que no se condena al Fisco a pagar las costas de la causa.

Se **CONFIRMA, en lo demás apelado**, de la referida sentencia.

Regístrese y en su oportunidad, devuélvase.

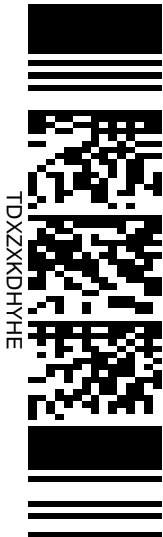
Redacción de la Ministro (Suplente) doña Soledad Orellana P.

Ingreso Corte Civil Rol N° 19.033-2022 (Acum. 900-2023)

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la ministra señora Paola Danai Hasbún Mancilla e integrada, además, la ministra (S) señora Soledad Orellana Pino y la abogada integrante señora Magaly Correa Farías. No firma la



ministra señora Hasbún, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Suplente Soledad Orellana P. y Abogada Integrante Magaly Carolina Correa F. Santiago, siete de diciembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a siete de diciembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

